

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Demandante: Leidy Johana Mazo Mora, Yulieth Andrea Mazo Mora y Yesica Yurley Mazo Mora

Demandada: Colpensiones

Radicado: 05 001 31 05 017 2017 00090 00

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. representada legalmente por el doctor Santiago Muñoz Medina identificado con cédula de ciudadanía 16.915.453 y tarjeta profesional 150.960 del Consejo Superior de la Judicatura, y por sustitución de éste se le reconoce personería al doctor Darío Mauricio Tobón Chamorro identificado con cédula de ciudadanía 80.845.672 y tarjeta profesional 271.442 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 017 2017 00090 00 promovido por **LEIDY JOHANA MAZO MORA, YULIETH ANDREA MAZO MORA y YESICA YURLEY MAZO MORA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE**

PENSIONES – COLPENSIONES, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las demandantes frente a la sentencia emitida el 21 de marzo de 2017 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **055**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Leidy Johana Mazo Mora, Yulieth Andrea Mazo Mora y Yesica Yurley Mazo Mora, demandaron a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su madre María Eugenia Mora Barrientos a partir del 12 de noviembre de 2003, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que su madre María Eugenia Mora Barrientos falleció el 12 de noviembre de 2003, fecha para la cual eran menores de edad y dependían económicamente de la causante. Para el momento de su deceso la señora María Eugenia Mora Barrientos era cotizante activa y tenía sufragadas un total de 191.43 semanas. El 3 de mayo de 2013 solicitaron ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, misma que les fue negada mediante la resolución 313193 de 21 de noviembre de 2013, aduciendo que la causante no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento. El 9 de septiembre de 2016 reclamaron nuevamente la prestación económica aplicando la condición más beneficiosa, y Colpensiones por medio de la resolución GNR 297408 de 10 de octubre de 2016, confirmada en la resolución GNR 376347 de 9 de diciembre de 2016, niega el derecho

pensional con el argumento de que la asegurada no tenía las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a su muerte.

En sentencia proferida el 21 de marzo de 2017, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones formuladas en la demanda, y condenó en costas a las accionantes.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de las demandantes considera que a sus representadas les asiste derecho a la pensión de sobrevivientes porque la Corte Constitucional en las sentencias T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-556 de 2014, T-401 de 2015, T-464 de 2016, y T-084 de 2017, ha precisado que la aplicación de la condición más beneficiosa, conlleva dos interpretaciones posibles del principio de favorabilidad, una defendida por la Corte Constitucional y otra por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, y por ello, conforme el artículo 53 de la Constitución las más favorable al trabajador es la interpretación amplia y asumida por la Corte Constitucional, y toda vez que la señora María Eugenia Mora Barrientos dejó acreditadas las 26 semanas en el año inmediatamente anterior o las 26 semanas si se encontraba cotizando, en toda su vida laboral, las demandantes resultan beneficiarias de la prestación económica.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de las demandantes allegó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión haciendo referencia a los mismos puntos del recurso de apelación y reiterando que en el caso concreto se debe aplicar el precedente de la Corte Constitucional porque la señora María Eugenia Mora Barrientos al momento de su fallecimiento tenía 32 años de edad, era cabeza de familia y madre de 3 menores de edad dependientes económicamente de ella y además era cotizante activa.

El apoderado de Colpensiones presentó oportuno escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si a las demandantes Leidy Johana Mazo Mora, Yulieth Andrea Mazo Mora y Yesica Yurley Mazo Mora les asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su madre María Eugenia Mora Barrientos, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, al retroactivo pensional, intereses moratorios o en subsidio indexación.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa a folios 16 a 73 del expediente. La Sala encuentra:

- i) Que la señora María Eugenia Mora Barrientos falleció el 12 de noviembre de 2003.
- ii) Que las demandantes Yulieth Andrea Mazo Mora, Yesica Yurley Mazo Mora y Leidy Johana Mazo Mora, hijas de la causante, nacieron en su orden: el 8 de mayo de 1992, el 7 de febrero de 1994 y el 24 de junio de 1995.
- iii) Que las mencionadas accionantes le reclamaron administrativamente a Colpensiones el 3 de mayo de 2013, la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su madre María Eugenia Mora Barrientos.
- iv) Que Colpensiones negó la prestación económica por medio de la resolución GNR 313196 de 21 de noviembre de 2013, aduciendo que la asegurada no cotizó 50 semanas que exige el artículo 12 de la Ley 797 de

2003 dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento.

- v) Que el 19 de septiembre de 2016, presentaron nueva solicitud pensional al amparo del principio de la condición más beneficiosa, y la administradora de pensiones mediante la resolución GNR 297408 de 10 de octubre de 2016, confirmada en la resolución GNR 376347 de 9 de diciembre de la misma anualidad, negó la prestación con el argumento de que la causante no contaba con 26 semanas dentro del último año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual deberá proceder a negarse la aplicación de la condición mas beneficiosa.
- vi) Que la señora María Eugenia Mora Barrientos se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 21 de enero de 1991, y cotizó en dicha entidad desde esta fecha hasta el 12 de noviembre de 2003, un total de 191.43 semanas.

DEL DERECHO PENSIONAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que, por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 66 del expediente informa que la señora María Eugenia Mora Barrientos falleció el 12 de noviembre de 2003. Por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallece, siempre y cuando éste

hubiese cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento.

Y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y dependientes económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes.

Sin embargo, en este evento no se colma el presupuesto de la densidad de semanas aludido, porque la historia laboral que reposa a folios 73 del expediente informa que la asegurada María Eugenia Mora Barrientos, cotizó al sistema de pensiones, entre el 21 de enero de 1991 y el 12 de noviembre de 2003, un total de 191.43 semanas, de las cuales 31.71 semanas corresponden a los últimos tres años anteriores a su fallecimiento.

La Corte Constitucional ha adoctrinado que el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 Superior y 21 del Código Sustantivo del trabajo, “obedece a uno de los dispositivos que la Carta Política establece para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la interpretación o aplicación de las normas que regulan relaciones del trabajo”; y opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones (Sentencias T-792 de 2010 y T-350 de 2012 y T-084 de 2017).

La Corporación mencionada ha señalado en diversas oportunidades que cuando se analiza sobre la procedencia de la pensión de sobrevivientes se puede examinar el reconocimiento de esta prestación a la luz de una norma jurídica anterior a la vigente en el momento de causarse el derecho, aplicando el principio de la condición más beneficiosa como una expresión del principio de favorabilidad, y que para tal reconocimiento es necesario demostrar que el afiliado cumplió el número de cotizaciones exigidas por dicha norma jurídica, y que los aportes se efectuaron durante su vigencia (Sentencia SU 442 de 18 de agosto de 2016).

El alto Tribunal ha justificado así la aplicación del principio de favorabilidad:

“En efecto, la Corte Constitucional determinó... que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar aplicación a una norma anterior... si el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión.

Para la Corte Constitucional resulta claro que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez, el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a sus familiares. Asimismo, es de importancia resaltar que el acceso a la pensión de sobreviviente resulta necesario para la protección del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente en aquellos casos en que se evidencia una dependencia económica del cónyuge o compañero permanente supérstite, con el afiliado fallecido. De esta manera, la aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, y en especial, de la condición más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en condiciones dignas.” (Sentencia T-464 de 2016).

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por su parte, respecto a la aplicación del principio de condición más beneficiosa en pensiones de invalidez y sobrevivientes, en la sentencia SL 4650 de 2017 fijó la nueva doctrina sobre la aplicación de este principio en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, definiendo los supuestos en que debe reconocerse la prestación y explica cómo opera tal principio en determinadas situaciones, lo cual se reiteró en las sentencias SL 2358 de 2018 y SL 1341 de 2019, entre otras.

Acorde con la línea jurisprudencial de dicha Corporación, para causarse la pensión de sobrevivientes la causante debía acreditar el cumplimiento de 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de

2003, supuesto que no se cumple en este caso, en tanto para tal periodo no efectuó aportes al sistema general de pensiones.

Y es que, al ser cotizante activa para el momento del deceso, pero no para el momento en que operó el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 cuya aplicación se pretende, y la Ley 797 de 2003, su caso se ubicó en la hipótesis 4.2 de la sentencia SL 4650 de 2017, esto es, **no estar cotizando al momento del tránsito legislativo, pero estarlo a la fecha de su fallecimiento**, caso en el cual sería procedente la pensión de sobrevivientes si el afiliado al momento del cambio legislativo -29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero 2003, periodo en el que no se evidencia ninguna semana cotizada en este caso. Requisito que también se exigió en la sentencia SL 2358 de 2017 al estudiarse los supuestos para conceder la pensión de invalidez en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, donde se indicó que, “...si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta...”.

Así las cosas, pese a que la señora María Eugenia Mora Barrientos al momento de su fallecimiento se encontraba cotizando y acreditó 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, tal como lo regula el literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, ello resulta insuficiente, en tanto era necesario que la afiliada en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2003), hubiera cotizado como mínimo 26 semanas, lo cual no se acreditó.

Lo anterior denota que no le asiste razón a la parte actora al indicar que la causante cumple con los requisitos de la Ley 100 de 1993 primigenia y dejó acreditado el derecho, en tanto acreditar 26 semanas cotizadas en cualquier tiempo no es el único requisito para consolidar el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme a las reglas jurisprudenciales citadas.

Ahora, frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el transito legislativo entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 797 de 2003, supuesto que también fue analizado por la Juzgadora de primera instancia, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia¹ al indicar que tal principio opera únicamente en relación con la norma inmediatamente anterior a aquella que regula el caso particular, por lo cual, en los casos en los que el deceso ocurre en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la única posibilidad válida de acudir a una norma anterior remitiría, al texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, no resultando admisible el estudio del derecho pensional a la luz del Decreto 758 de 1990.

Bajo el contexto anterior, se reitera que, a luz de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, por la imposibilidad de establecer un tránsito normativo entre el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y la Ley 797 de 2003, lo que en definitiva no permite la utilización del referido principio.

Tesis respaldada por la Corte Constitucional en sentencia **SU-005 de 2018**, al considerar que está acorde a la reforma introducida al sistema pensional en el Acto Legislativo 01 de 2005, y solo es desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable, fijándose en tal proveído las condiciones necesarias a satisfacer para establecer el estado de vulnerabilidad, siempre y cuando los aportes del afiliado se hubiese efectuado bajo el régimen del Decreto 758 de 1990, situación que no se presenta en el este caso, en tanto la asegurada fallecida solo cotizó 127.57 semanas con anterioridad al 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Dado lo anterior, al no acreditarse la procedencia de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, se confirmará la sentencia de primera instancia que se revisa en apelación.

¹ Sentencias SL1673-2020, CSJ SL379-2020, SL1938-2020 citadas en la Sentencia SL290-2021, Radicación n.º87064 del 9 de febrero de 2021

Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo de las demandantes.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en apelación.

SEGUNDO: Las costas en ambas instancias corren en favor de Colpensiones y a cargo de las demandantes.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$908.526,00.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 62 de Abril 15 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA
LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO**

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

05 001 31 05 017 2017 00090 01

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **adad2a622374b0d65307c78e64b53996d660e5129c627af168b24e3bdcbc0675**
Documento generado en 14/04/2021 02:50:22 PM